TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de
dos mil veintitrés (2023).

Ref: Exp. 25000-22-13-000-2023-00078-00.

Decídese lo pertinente acerca de la solicitud de cambio de radicación del proceso reivindicatorio que adelanta Jenifer Julieth Osorio Vásquez contra Hilda Pardo Alfonso ante el juzgado promiscuo municipal de Chaguaní, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

Con fundamento en el artículo 30 de la ley 1564 de 2012, solicita la demandante dentro del proceso del epígrafe su cambio de radicación con el fin de que sea enviado al juzgado promiscuo municipal de San Juan de Río Seco, donde se garantizarán la imparcialidad y por ende las garantías procesales de las partes.

Aduce, en compendio, que la reivindicación recae sobre parte de los predios ubicados en la calle 3 A #4-32 y calle 4 #4-22/16 de Chaguaní, frente al parque principal del municipio, de los cuales la demandada ocupa una parte; sobre los cuales ya la demandada en el proceso había solicitado su pertenencia, la que desestimó el juzgado promiscuo del circuito de Guaduas, al igual que lo había intentado un tercero ante el mismo juzgado de Chaguaní en 2017, en cuyo trámite fue maltratada por la titular de ese despacho judicial, quien ‘está parcializada’ en favor de la demandada, pues es quien llevaba los tintos a los funcionarios de dicho estrado judicial y de la Alcaldía; al

negar las pretensiones en dicho proceso, la titular del juzgado le dijo que quedaban en “*tablas*”, lo que demuestra que su juicio está afectado, prueba de lo cual son los \$50.000 que fijó como agencias en derecho, cifra que ni siquiera cubre los viáticos o costos de papelería.

En este último proceso la demandada formuló otra vez en reconvención la pertenencia, la que no ha debido tramitarse por existir cosa juzgada; la inspección de policía le impidió hacer uso de algunas dependencias de la casa, vulnerando así su derecho a la propiedad; luego de más de tres años en conflicto y desconociendo su calidad de propietaria, mediante sentencia de 3 de junio de 2022, se negaron las pretensiones tanto de la demanda principal, como de la de reconvención, aduciendo que ella sólo tiene falsa tradición y no dominio, en un abierto desconocimiento de que en el certificado de tradición y libertad aparece con la letra X, que indica que es titular de derecho real de dominio; aunque las dos interpusieron tutela contra ese fallo, en la que formuló Hilda, el Tribunal ordenó dictar nuevamente sentencia revisando las pruebas, pero la nueva sentencia fue casi la misma, entendiendo que el predio queda en un statu-quo, cuando eso no procede en los procesos civiles, al punto que lo que dijo la Corporación fue que “*quien pretende la posesión permanece en el inmueble si no tiene ni cumple con los requisitos como poseedor y que al no cumplirlos debe de ser despojada de los mismos*”.

Y como no existió ningún pronunciamiento adicional sobre la reivindicación, formuló una nueva tutela, en la que mediante fallo de 3 de noviembre de 2022, el Tribunal la facultó para proponer incidente de desacato, lo que así hizo, pues la juez se niega a declarar que como propietaria tiene derecho a la restitución de esos bienes, a sabiendas de que de no haber acreditado su dominio no se habría admitido a trámite la demanda.

Consideraciones

De antemano hágase claridad en que de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 1564 de 2012, le corresponde resolver al Tribunal, por conducto de la Sala Civil, las solicitudes de cambio de radicación de procesos de esa especialidad, cuando su remisión deba hacerse “*al interior (sic) de un mismo distrito judicial*”.

Establecido lo anterior, impónese precisar que esa posibilidad que introdujo el legislador de cambiar la radicación de un proceso sólo tiene cabida “*excepcionalmente, cuando en el lugar en donde se esté adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes*”; para ello, ha menester, por obvias razones, que a la solicitud se adjunten “*las pruebas que se pretendan hacer valer*” con el fin de acreditar a través de diferentes elementos de convicción la virtualidad jurídica y la trascendencia de las razones que ameriten alterar las reglas de competencia.

Aquí, dice la demandante que ese cambio deviene necesario, pues el hecho de que el juzgado no le haya dado la razón al proveer sobre la demanda reivindicatoria que formuló y esté intentando siempre privilegiar los intereses de la demandada en los distintos procesos de pertenencia que ha intentado, es suficiente para considerar que la imparcialidad de la funcionaria judicial se encuentra comprometida, cosa que podría repercutir en desmedro de las garantías que le asisten dentro del proceso.

Mas, como bien se deduce de la norma, “*el cambio de radicación no ha sido establecido para reemplazar al juez o fallador de un asunto, sino para variar el lugar donde se adelanta la actuación cuando tal escenario no garantice un normal desenvolvimiento del proceso, aunque en el fondo él implique lo primero. Por eso, una vez más, debe destacarse que el fenómeno del cambio de radicación no es de carácter particular o personal, a través*

del cual puedan los sujetos procesales resolver situaciones a tratar por vía de interposición de recursos, recusaciones o de mejor desempeño de la función que le es propia como sujetos procesales (...) constituye un instrumento a ser utilizado sólo frente a circunstancias que entrañen grave peligro para el interés público de la justicia discernida con la debida ponderación, rectitud y eficacia que reclama todo juzgamiento, porque se ponga en peligro e interés privado del procesado o la garantía de una defensa justa, o de su integridad personal, aspectos, ninguno de ellos, predicables aquí” (Cas. Penal, auto de 30 de enero de 1990).

Noción que, aplicada al caso, autoriza decir, sin mayores elucidaciones, que en esta especie litigiosa no existe ni la más remota posibilidad de que el Tribunal acceda a ese cambio de radicación postulado por la solicitante, por supuesto que si su fundamento atañe a un aspecto subjetivo de la juzgadora que conoció del proceso que ya fue zanjado con sentencia, que no a esas circunstancias específicas que obligan la adopción de esa medida extraordinaria, lo último que podría hacerse sería entrar a variar la competencia que tiene asumida sobre el caso el juzgador, por razones como las explicitadas en la petición, quizá esperando que en caso de declararse que ésta ha desacatado la orden del Tribunal, otro juzgador pueda pronunciarse accediendo a sus pedimentos.

Además, si la preocupación de la solicitante está en que la imparcialidad de la juzgadora pueda estar afectada por esas circunstancias narradas en el escrito, no debe olvidarse que el legislador instituyó una serie de causales [de recusación y también de impedimento] que bien puede invocar si considera que alguna o algunas de ellas se configuran, lo cual significa que si tiene a la mano este tipo de instrumentos para obtener el fin pretendido con el cambio de radicación solicitado, es claro que éste, así en gracia de discusión cupiera, no sería tampoco por esa razón de recibo, menos si, fuera de eso, ninguna prueba existe en la actuación que autorice concluir en ese supuesto trato denigrante que en su contra le ha inferido la titular del juzgado de Chaguaní, y

tampoco de la actuación propiamente dicha asoman elementos que permitan poner en entredicho su ecuanimidad, más todavía cuando la propia solicitud está reconociendo que tanto en ese proceso de pertenencia anterior, como en el de ahora, el juzgado no le dio vía libre a esas súplicas usucapienistas, lo que termina dejando en aprietos la seriedad de esa argumentación.

En fin, por todo, la solicitud de cambio de radicación habrá, pues, de denegarse.

II.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, resuelve:

Negar la solicitud de cambio de radicación elevada por la demandante dentro del presente asunto.

Comuníquese la decisión aquí adoptada al juzgado promiscuo municipal de Chaguaní.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **803242c9e4faf9c099e148bbe3fa64a91ff1526406e71b05fa29f8c80a45c1d**

Documento generado en 31/03/2023 11:14:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>